



Arqueología preventiva: una revisión crítica*

Preventive archaeology: a critical review

La arqueología preventiva (también conocida como arqueología comercial o arqueología profesional) nació durante los años sesenta para enfrentar la pérdida de registros arqueológicos en áreas sujetas a desarrollo urbanístico, principalmente en ciudades. Tras unos inicios difíciles, la arqueología preventiva ha sido el campo de la disciplina arqueológica que más ha crecido en los últimos cincuenta años. Dos han sido sus principios fundamentales: condicionar las nuevas construcciones a una excavación previa y que los promotores asuman el coste de esas excavaciones.

Cincuenta años después, se propone una revisión crítica de la arqueología preventiva haciendo un recorrido por sus principales tópicos. La sociedad está cambiando y la conciencia de la emergencia ecológica posiblemente nos obligue a repensar la lógica de consumo de suelo propia del capitalismo. La nueva arqueología preventiva debe adaptarse a un marco de decrecimiento y mayor conciencia sobre la finitud de los recursos, incluido el registro arqueológico.

Palabras clave: arqueología urbana, decrecimiento, planeamiento urbanístico, arqueología profesional

Preventive archaeology (aka development-led archaeology) originated in 1960s to address the destruction of archaeological features stemming from urban development. After difficult beginnings, preventive archaeology has become the fastest growing area of the discipline of archaeology in the last 50 years. Its two main principles have been to render excavation a condition prior to construction and oblige developers to assume the costs.

This article thus offers a critical review of the main topics of preventive archaeology subsequent to its inception 50 years ago. Society is changing and awareness of the ecological emergency may force it to rethink capitalism's perspective of land consumption. New preventive archaeology must therefore adapt itself to a framework of degrowth and a greater awareness of the finiteness of resources, including that of the archaeological record.

Keywords: urban archaeology, degrowth, urban planning, professional archaeology

* Este texto se ha redactado al amparo del proyecto I+D+i "Valoración y tasación de los bienes pertenecientes al Patrimonio Arqueológico", del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Introducción

La arqueología preventiva (APre), tal y como se entiende en Europa, esto es, la creación de un marco normativo que permita el establecimiento de cautelas en razón de la preexistencia de restos arqueológicos conocidos o supuestos, de forma que se condicione el uso de esos terrenos y su transformación, se ha convertido en la estrella más rutilante de la gestión del patrimonio arqueológico del último tercio del siglo pasado. Siempre que se habla de ella, salen a relucir números de excavaciones, de superficies excavadas o de profesionales activos, sin parangón en la etapa anterior. Sin embargo, tras más de veinte años de aplicación presidida bajo el signo de la gestión de la oferta (proveer de los medios suficientes para el desarrollo de nuevas excavaciones), la crisis económica de 2007-2008 golpeó sin piedad a la arqueología profesional, mostrando su vulnerabilidad al ser dependiente del ciclo constructivo. La recuperación económica ya no ha puesto tanto énfasis en el respeto al patrimonio arqueológico como condición para la ejecución de las obras de transformación del suelo, aunque el entramado legal que sustenta la APre se ha mantenido hasta ahora. La tentativa de viraje hacia los «tiempos de los bulldóceres» ha alertado a la arqueología, que ha decidido revisar los fundamentos de la APre, sobre todo en lo referido a la atención al resto de la sociedad.

En este trabajo proponemos que tal proceso de revisión encierra una aporía por cuanto se mantiene dentro de los límites definidos por el modelo vigente de APre. Para superar dichos límites, será necesario cambiarlo. El éxito de la APre se ha basado en su adecuación para no obstaculizar la depredación de suelo necesaria para abastecer el consumismo del capitalismo global, que modela nuestras sociedades occidentales.

Repensar el «cadáver exquisito» en que se ha convertido la APre no solo resulta procedente desde la propia praxis profesional, administrativa y académica, sino que también es un deber ético por las implicaciones sociales que conlleva (Blein 2019). Este ejercicio no se solventa mediante un análisis DAFO sobre sus virtudes y defectos, porque no debe ir dirigido a superar las limitaciones del presente modelo, sino a contribuir a un cambio de paradigma. Este debe transmutar la lógica «ecocida» en la que vivimos en un modelo consciente de la insostenibilidad ecológica y social del sistema consumista actual, así como de la falacia de la lógica del crecimiento económico constante en una biosfera limitada.

Obviamente, este cambio de paradigma está por encima de las posibilidades de la arqueología en sí misma. Acaso tampoco sea la función

primordial de la arqueología. Entonces, cabe preguntarse sobre cuál podría ser ese papel de la APre —y de la arqueología en general— en este escenario. He de confesar que no lo sé. No traigo soluciones mágicas ni apelaciones a un actuar «buenista».

La consciencia de muchos dirigentes políticos sobre la inevitabilidad de asumir la lucha contra la emergencia climática, como una realidad insoslayable, abre la vía para reflexionar sobre la APre, así como sobre las falsas soluciones que se nos plantean para hacer perdurar este modelo. Mostrar el desfase entre los contornos del modelo actual y las necesidades emanadas de la propia heurística arqueológica no solo resulta procedente desde la propia praxis profesional, administrativa y académica, sino que también es un deber ético por las implicaciones sociales que conlleva. Ir más allá, aunque sea necesario en algún momento, se me antoja ahora mismo una ficción. Tampoco estoy muy seducido por las propuestas hilvanadas con el hilo del decrecimiento. La aproximación a ese escenario marcará el curso de hacia dónde dirigir la APre. En este trabajo, profundizaré en el itinerario y las deficiencias de la APre siguiendo, como hilo conductor, eslóganes que permitan resumir el sentido de los apartados que rubrican. Por razones de brevedad, me centraré, sobre todo, en la arqueología urbana, epítome de la APre.

«¡Más madera!»

«¡Más madera!» se ha convertido en una de las frases icónicas de Groucho Marx, aunque nunca la pronunciase.¹ Ignoro por qué se ha transformado la frase original, pero eso no importa ahora. Poca duda cabe de que «¡más madera!» es una de las expresiones predilectas para dar a entender que un proceso necesita ser alimentado sin límites para mantenerlo en funcionamiento, lo que, en términos de microeconomía, se denomina «gestionar la oferta». Tampoco hay mucha duda de que semejante proceso no resulta sostenible a la larga. Eso es justamente lo que ha acontecido con la APre: se inició gestionando el abastecimiento de excavaciones para satisfacer el ritmo creciente de transformación del suelo y, de ahí, todavía no se ha salido.

En la década de los setenta del pasado siglo, minúsculos y marginales grupos de arqueólogos

1. En efecto, en la famosa secuencia del tren en la película *Los hermanos Marx van al Oeste* (v.o. *Go West*, 1940), Groucho grita «¡traed madera!» (*timber!*, en la versión original), mientras los otros dos hermanos destrazan los vagones para alimentar la caldera.

se enfrentaron a las dinámicas constructivas al objeto de poder llevar a cabo, en condiciones desfavorables y precarias, pequeñas excavaciones de rescate. Pero ese «tiempo de los buldóceres» (Lasfargues y Mandy 1985: 149) estaba llamado a finalizar pronto, al menos en algunos países. Con el beneplácito de las administraciones municipales, la autopsia arqueológica previa a la construcción en ámbito urbano se fue instaurando como requisito para levantar nuevas edificaciones (Chapelot 1982; Negri 1995; McGill 1995: 153-168; Rodríguez Temiño 2004: 164-228).

La sistematicidad de las intervenciones previas a los movimientos de tierra generó un problema para las débiles estructuras sustentantes de la APre en todos los países. Para la propia subsistencia de la APre, era vital dar abasto a esa ingente demanda; de otra forma, la lógica del desarrollo habría terminado con la aventura del conservacionismo devolviéndola a la excepcionalidad de la etapa precedente. La respuesta articuló varios frentes. Primero, el refuerzo de las estructuras administrativas se combinó con el surgimiento de la arqueología profesional, ya fuese en empresas privadas —como ocurrió en Reino Unido y España (McGill 1995: 59-79; Rodríguez Temiño 2004: 229-260)—, en entidades vinculadas a la administración —como en Francia (Demoule 2002)— o de la mano de profesionales bajo la dirección de los cuadros administrativos —como en Italia (Guermanti 2016).

En el terreno operativo, se adaptaron los sistemas de registro arqueológico para favorecer la celeridad y la autonomía de los participantes en las excavaciones, ya que la «conservación por registro» (es decir, la eliminación del «obstáculo arqueológico» mediante una excavación previa) ha sido la principal (por no decir la única) respuesta arbitrada para solventar el conflicto entre obra nueva y yacimiento preexistente.

Poca duda cabe de que el principal logro fue la transmisión de la obligación de que los propios promotores sufragasen las excavaciones, en aplicación del vago principio de responsabilidad ambiental según el cual «quien contamina paga» (Novaković y Horňák 2016; Trow 2016). La imposición de esta carga, a través de las figuras de la planificación urbanística, no ha encontrado justificación legal (Jégouzo 1995: 324 s.; Rodríguez Temiño 2004: 191), salvo cuando se modula (Bermúdez Sánchez 2003; Geppert y Meller 2016: 39 s.). No obstante, su aplicación ha sido ampliamente extendida sin especiales protestas hasta hace poco tiempo (Florjanowicz 2016).

Este modelo de APre, forjado a partir de experiencias nacionales de países fundamentalmente occidentales, sobre todo en el campo de la arqueología urbana, se materializó en el Convenio

Europeo sobre la protección del Patrimonio Arqueológico (Revisado), firmado en La Valeta en 1992 (Convenio de Malta). Más adelante alcanzó a otros países (Castillo Mena 2014; Olivier 2016). En realidad, el impulso neoliberal del Tratado de Maastricht (1992) fue el auténtico motor involuntario de la APre (Verbruggen 2016). En efecto, esta respondía a la dinámica de expansión (a la vez que la legitimaba) del capitalismo global, a su avidez de consumo de suelo y de renovación del parque inmobiliario urbano, a través de los instrumentos antes señalados.

La crisis de 2008 afectó profundamente a la arqueología profesional, al ralentizarse o pararse abruptamente la dinámica constructiva urbana y de infraestructuras territoriales (Schanger y Aitchison 2010). Sin embargo, no supuso exactamente una crisis de la APre, ya que siguió funcionando con los mismos esquemas por cuanto no se alteraron los fundamentos del capitalismo globalizado que la sustenta (Rodríguez Temiño 2010b).

En este sentido, el tránsito de la arqueología de urgencia a la APre es susceptible de ser leído de otro modo, más acorde con esta vinculación entre APre y excavaciones. A saber, si en los setenta el planeamiento urbanístico conservacionista articuló figuras de protección para el patrimonio arqueológico, con el significado de «riesgo para la arqueología», a fin de advertir a los promotores y autoridades públicas de que en esas áreas no podían llevarse a cabo movimientos de tierra (Negri 1995), a partir de mediados de los ochenta la zonificación cambió de significado. Ahora advierte del «riesgo de arqueología», es decir, de la necesidad de prever medidas compensatorias anteriores al comienzo de las obras y de las cargas que ello conlleva.

La práctica identificación entre APre y excavaciones define, por tanto, el campo de actuación de la acción preventiva y fija, sin duda, el pacto tácito entre las dos partes (destruidores y rescatadores) que la mantiene con vida: el intercambio de destrucción por registro de la evidencia arqueológica. Esa, y no otra, es la esencia de la APre, a pesar de que la Convención de Malta o la legislación sobre impacto ambiental consideren la conservación por registro como el último recurso en una situación de conflicto entre obra nueva e integridad del patrimonio arqueológico.

«¿En qué momento se había jodido el Perú?»

Mario Vargas Llosa inicia *Conversación en la Catedral* (1969) con esta inquietante pregunta en la mente del personaje principal, Santiago Zavala (acaso *alter ego* del propio Vargas Llosa antes de hacer apostasía de sus iniciales ideales, cercanos

a la izquierda política). De forma análoga a Zavala, quisiera reflexionar en este apartado sobre los motivos por los que se frustró la APre y el momento en el que lo hizo. Al margen de su valor como recurso retórico, por su carácter directo e impactante, esta paráfrasis resulta pertinente para aclarar el sentido de la presente indagación y, por tanto, la razón por la que se emplea aquí. Como en la novela, la respuesta a la pregunta no se da satisfactoriamente con una fecha a partir de la cual se torcieron las cosas; tampoco es esa mi pretensión en este trabajo sobre la APre. Antes bien, busco resolver el falso dilema propuesto por el enunciado explicando los límites de la APre, ya que de ellos trae causa la insatisfacción con el modo en que se gestiona la protección preventiva del patrimonio arqueológico. Apurando la cita literaria, debo señalar que, al contrario de lo que sugiere el sentir de Santiago Zavala, personalmente no creo que haya un «Perú» (léase una APre) que salvar, al menos en su actual formato.

Como ya se ha apuntado más arriba, los dilemas que aquejan a la APre no son producto de un desviacionismo respecto a unos fundamentos inmaculados a los que debería volverse, enmendando la situación actual. Los problemas de la APre son consecuencia de la falacia sobre la que se articula su dinámica. En realidad, la APre muere de éxito. El déficit entre el monto de excavaciones llevadas a cabo y las investigaciones que deberían haber generado no es un defecto del sistema que pueda solventarse fácilmente; antes bien, ejemplifica perfectamente la naturaleza engañosa de los presupuestos conceptuales de la APre. Completar el ciclo de la investigación arqueológica no es una cuestión baladí que debamos pasar por alto, sino la piedra angular para comprender por qué se «ha jodido» la APre.

Francia ofrece un campo de estudio para la APre que no puede ser comparado con ningún país de su entorno. La originalidad gala radica en que el problema de la APre, al hilo de las reformas legislativas operadas en este campo, ha sido debatido *in extenso* en la Asamblea, poniendo especial empeño en la calidad investigadora de las excavaciones preventivas (Randoin 2016).

El coloquio internacional celebrado en Tours en 1980 (*Archéologie urbaine...* 1982), que considero el principal referente de la moderna concepción de la arqueología urbana, reflejó perfectamente esta dicotomía. A Tours no se llegó con una sola concepción de qué debía ser la arqueología urbana, sino con dos (Rodríguez Temiño 2010a). Ambas visiones no llegaron a converger en una formulación conjunta de la actividad arqueológica en las ciudades. La principal causa de separación entre ellas era la existencia de un proyecto de investigación *de* la ciudad, en el que cabían mal

las excavaciones de salvamento, en la terminología del momento (Galinié 1982). A finales de los noventa, Henri Galinié (1999) admite con realismo que, prácticamente desde el inicio, la APre había usurpado el espacio de la arqueología urbana.

Esta división ha ido perdiendo vigor y, a comienzos de este siglo, se reconocía sin rubor que en Francia se hacía «archéologie en la ville», habiéndose preterido la idea del proyecto de ciudad (Garmy 2001). El debate ya no estaba entre arqueología urbana y APre, sino en las dificultades que tienen otros proyectos de investigación para recibir financiación. Jean Chapelot (2010), aliado en Tours de la visión historicista defendida por Henri Galinié, reclamaba fondos y personal dedicado a la investigación para que la arqueología medieval saliese de «la longue maladie infantile qu'a été la crise de l'archéologie préventive» para entrar en la investigación adulta.

Al hilo de esta discusión, uno de los caballos de batalla del Inrap es mostrar las aportaciones hechas al conocimiento del pasado desde la APre (Demoule [ed.] 2007). Sin embargo, a pesar de los balances positivos defendidos por el Inrap, la realidad resulta menos halagüeña a los ojos de la comisión encargada de redactar el *Livre blanc de l'archéologie préventive*, que no deja de reclamar más dinero y atención para hacer frente a la obligación de concluir los ciclos de investigación iniciados con las excavaciones (CESESAP 2013).

Además de ello, la consideración de investigación posexcavatoria se presta a no poca interpretación. Si se toma como ejemplo la época romana (Blin 2007), observamos que, con excepción de algunos casos señeros como las excavaciones en Jouars-Pontchartrain (Yvelines), que han dado lugar a importantes publicaciones, el resto de referencias a las aportaciones realizadas por la APre se remite a cortos trabajos (de entre 3 y 10 páginas) que difícilmente pueden ser entendidos como investigaciones exhaustivas. No faltan quienes reconocen que el desequilibrio entre excavación e investigación realmente llevada a cabo se está convirtiendo en un abismo infranqueable, a pesar de la retórica oficial (Depaepe 2016).

Aunque no sea significativamente distinta la situación en Reino Unido, merece la pena destacar el esfuerzo realizado, en relación con la ocupación del medio rural en época romana (Trow 2016) o espacios funerarios (Pillat *et al.* 2020), para reunir todos los informes finales de las excavaciones en trabajos coherentes y conjuntos. No obstante, siendo loables semejantes empresas, y sin desdeñar el uso de internet para almacenar y compartir grandes bases de datos sobre excavaciones arqueológicas (Richards 2017), se trata más bien de un primer paso para ulteriores investigaciones con instrumental más analítico. Esta

fase posterior, de momento, no parece reclamada por nadie como parte de ese programa de aprovechamiento de las excavaciones realizadas.

La situación en España no es mejor. La arqueología urbana se inició con un compromiso claro con la publicación de las excavaciones (por ejemplo, TED'A 1987), pero el rápido crecimiento de las intervenciones puso en aprietos el mantenimiento de ese compromiso. Actualmente existe un monto inescrutable de excavaciones sin publicar, ni siquiera una breve memoria. En atención a ciertos indicadores, o a referencias al número de autorizaciones dadas en algunas comunidades en tal o cual año, podría estimarse *ad impressionem* que las actividades arqueológicas preventivas en España desde 1985 —por tomar como referencia el año de promulgación de la LPHE— ascienden a 40 o 45.000 (Rodríguez Temiño 2006, para el caso andaluz). De ellas, al menos 20.000 (como cifra igualmente estimativa) han sido excavaciones de ciertas dimensiones que entregaron un registro arqueológico significativo.

De manera inverosímil, este déficit de publicaciones no se encuentra incluido en la agenda del debate académico español, como muestran la mayoría de las ponencias de un reciente congreso sobre ciudades de origen romano en España y Portugal (Mateos Cruz y Palma García [eds.] 2020). Tal indiferencia me lleva a preguntarme si, en el supuesto improbable de que se acometiesen campañas de investigación para procesar y analizar ese cúmulo de información, realmente la arqueología tendría capacidad para asimilar e integrar ese volumen de datos —y las nuevas interpretaciones a las que daría lugar—, datos que, actualmente (y me temo que por un larguísimo tiempo), permanecen fuera de los circuitos de la investigación histórico-arqueológica.

No se detecta ninguna preocupación entre los responsables administrativos y políticos acerca de esta problemática. Primero, porque casi nadie les advierte de ella —al contrario, la retórica oficial es que todo marcha como debiera—, y segundo, y sobre todo, porque, aunque fuesen conscientes de ella, no tendrían medios para solventarla sin cuestionar la esencia misma del modelo.

Por supuesto que intervenciones preventivas recientes también han sido objeto de publicaciones completas, pero son muy raras, especialmente cuando son extensas. En esos casos, una de las premisas compartidas es que la dirección de los trabajos de campo y laboratorio recae en profesores universitarios, ya que gozan normalmente de la suficiente estabilidad laboral como para dedicarles el tiempo necesario sin que peligre su *modus vivendi*. Las excavaciones de la casa-palacio del Marqués de Saltillo, en Carmona (Belén Deamos *et al.* 1997), o la del complejo catedralicio en

Vitoria-Gasteiz (Azkarate Garai-Olaun y Solaun Bustinza [eds.] 2013), o la monografía sobre el dolmen de Montelirio (Fernández Flores, García Sanjuán y Díaz-Zorita Bonilla [eds.] 2016) ejemplifican esta situación.

Sin entrar en el debate sobre la financiación de los proyectos de excavación al margen de la APRe, debe quedar claro que este déficit de estudios y publicaciones rompe con lo que ha sido la tendencia de la arqueología a lo largo de todo el siglo XX. Era bien conocido que, por diversos motivos, un porcentaje amplio de excavaciones no terminaba en una publicación (Cherry 2011), pero, durante las décadas de los sesenta y setenta, la aspiración de la arqueología fue no solo minimizar ese déficit, sino alcanzar estándares de solvencia académica cada vez más altos, incluso a pesar de la limitada aplicación, en esos momentos, de las técnicas de arqueometría. En la península Ibérica, el epítome (siempre referido a excavaciones sobre época romana) podrían ser los ocho volúmenes de *Fouilles de Conimbriga*, editados entre 1975 y 1979 por Jorge de Alarcão y Robert Étienne, y convertidos en modelo de publicación de unas campañas de excavación.

Los resultados de las memorias de excavación o de las breves publicaciones no colman las exigentes necesidades del conocimiento académico, a pesar de las proclamas en sentido contrario. Tal incapacidad se pone de manifiesto cuando se pretende hacer un estudio temático y en profundidad con el registro accesible dejado por excavaciones preventivas. Como muestra, véase la desesperación expresada por Desiderio Vaquerizo (2010) en el caso de las necrópolis romanas de la Bética.

Se ha constatado, además, un hecho preocupante, aunque previsible. La tendencia a rebajar los estándares del registro de la evidencia arqueológica, lo cual es consecuencia de haber dejado en manos de los promotores la elección de los proyectos de excavaciones que deben desarrollarse (González Acuña 2004; Novaković y Horňák 2016: 30).

Orientar todos los instrumentos de gestión del patrimonio arqueológico hacia el desarrollo de excavaciones ha producido una saturación de las capacidades de carga, tanto en el mundo académico como en la gestión de la arqueología. Esto no es nuevo, ya era evidente hace muchos años (Rodríguez Temiño 2004: 369 ss.). Se ha obturado el modesto «sistema digestivo» de que dispone la arqueología para asimilar nuevos registros arqueológicos. Como reacción, se ha querido restar importancia a la utilidad de los datos, dando por sentado que solo son útiles para construir relatos sobre el pasado los recogidos dentro de un proyecto dirigido a responder determinadas cuestiones (Carver 1992). Esta aproximación produce un

sesgo en la investigación que enerva a muchos arqueólogos (Cherry 2011: 14).

Algunos autores (Demoule 2002 y 2016; Thomas 2002; Willems y Van den Dries 2007 o Kristiansen 2009) han querido circunscribir este problema al modelo de APre, eminentemente comercial, que impera en Reino Unido y, por su influencia, en otros muchos países. Se destaca que, en otros países con mayor peso del Estado en la APre, la investigación posterior está asegurada. Sin embargo, recientes críticas muestran que en países como Holanda o Suecia, con sumisión de la autonomía de los promotores al Estado, se padecen los mismos problemas (Ravn 2013; Gill 2020).

Nos enfrentamos, pues, a un dilema global: el éxito de la APre imposibilita la heurística arqueológica y elimina así la razón fundamental para la realización de nuevas excavaciones. No obstante, la APre sigue gritando «¡más madera!», aunque seamos conscientes de que ese tren no nos lleva a ningún sitio.

Para contestar la pregunta con la que he iniciado este apartado, diría que la APre nació «jodida» porque ha sido un subterfugio para justificar el desarrollismo depredador de suelo. Nunca ha habido interés real en prevenir el daño sobre el patrimonio arqueológico, solo en paliarlo. Pero, además, la APre se manifiesta indiferente ante el problema de acumulación de información generado por el éxito de su propia dinámica. Esta ruptura entre excavación e investigación no es de coste cero, ya que tiene como principal damnificada a la sociedad en cuyo nombre actuamos.

«[E]mosido engañado»

Durante unos meses de 2016 se pudo leer en un bloque de viviendas ocupadas en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra una pintada que rezaba «emosido engañado». Su anónimo autor desconocía que estaba destinada a convertirse en uno de los memes en español más populares en internet. Al viralizarse el grafiti perdió su contenido social (la desesperanza de las familias que habían ocupado unas viviendas sociales vacías y que, tras promesas de quedarse en ellas, fueron expulsadas y se quedaron casi todas en la calle) para reflejar cualquier decepción.² Si tuviese que elegir una frase para expresar la frustración de muchos ciudadanos con la APre y, en general, con el patrimonio arqueológico, optaría por ese grafiti, acaso escrito con tres palabras y mejor ortografía.

2. *El País* de 13 de febrero de 2020: «De una pared sevillana a meme internacional: la historia tras la pintada de “emosido engañado”.»

La misma sensación es compartida por buena parte de la arqueología profesional (Everill 2012).

La Convención de Malta —y, de paso, toda la APre— está siendo objeto de un proceso de revisión por parte de la EAC, uno de los principales *spin-off* de la propia Convención. El relato oficial de la EAC pone el acento en el encargo realizado por el Consejo de Europa a esa institución para que dé cuenta del cumplimiento de la Convención de Malta. A ello están dedicando reuniones y seminarios desde 2011 (Wollák 2014: 7). Sin embargo, resulta difícil desligar esta introspección de los efectos de la recesión económica de 2008. La recuperación de la crisis ha señalado con el dedo la necesidad de aligerar de cautelas y vinculaciones medioambientales y patrimoniales las inversiones en infraestructuras y el negocio inmobiliario. A escala nacional, la frustrada reforma de la Ley de Patrimonio Histórico de Madrid es un ejemplo paradigmático de esas exigencias.

Si bien, a tenor de los trabajos publicados en la serie *Occasional Paper* de la EAC, esta necesidad de repensar la APre no es sentida del mismo modo por todos los representantes de las instituciones integradas en ella, muchos de los cuales insisten en seguir explicando las estructuras sustentadoras de la APre en sus respectivos países, no cabe duda de que son cada vez más quienes piensan que la Convención de Malta está tocando a su fin, porque ya no responde a las necesidades de la arqueología actual (Olivier 2016). Como señala con precisión Arkadiusz Marciniak (2015: 35), «[t]he outcomes of the Malta Convention in many instances did not match expectations. Instead of becoming a mission of public service, archaeological heritage protection became too much of a business guided by principles of the market economy. It has been overrun by the self-regulating competitive model quintessentially played out in the financial fields of costs and profits».

Posiblemente fuese Willem Willems (2014) quien señaló al Convenio del Consejo de Europa firmado en Faro (2005) para indicar que el valor del patrimonio arqueológico para la sociedad era el horizonte hacia el que debía tornar los ojos la arqueología para encontrar un nuevo rumbo. Interesa de dicho Convenio la implicación social en todo el proceso de gestión del patrimonio arqueológico, aunque no parece fácil conectar Malta y Faro a tenor de la desmañada argumentación ofrecida en ocasiones (Florjanowicz 2016).

El Convenio de Faro, a pesar de las explicaciones de sus fundamentos dadas por Giuliano Volpe (2016), viene sin manual de instrucciones y deja a la arqueología en el mismo lugar en el que estaba, esto es, buscando cómo conectar con la sociedad. Resulta expresivo de esta desorientación que en la conferencia de la EAC celebrada en Sofía (Bul-

garia) en 2018, cuya orientación era justamente debatir esa cuestión, las ponencias publicadas se centrasen en casuísticas nacionales y solo respondiesen muy tangencialmente a la agenda de la convocatoria (Stefánsdóttir 2018).

La posibilidad de ofrecer a la sociedad algún tipo de producto de rápido consumo procedente de la APre ha abierto, parece ser, una nueva etapa en la gestión del patrimonio arqueológico. Frente a la «cultura de Malta», basada en el registro y en la gestión de excavaciones, se ha erigido una nueva «cultura de los *mass media*», para la cual los profesionales de la arqueología deben adquirir habilidades procedentes de la mercadotecnia (Virágos 2018). La preocupación por que la arqueología se abriese a la sociedad se ha plasmado en la Agenda Amersfoort, que trata de unificar los convenios de Malta y Faro. El documento se centra en tres cuestiones cuya atención, en la gestión del patrimonio arqueológico, se considera urgente: la integración de la arqueología en la sociedad, la necesidad de apostar por la conservación del patrimonio arqueológico y la gestión de las fuentes de la historia europea (Schut *et al.* 2015).

La Agenda Amersfoort —que yo sepa— carece hasta el momento de plasmación práctica en la cotidianeidad de la gestión de la APre. Esta está dominada todavía por la contradicción entre los planteamientos grandilocuentes y la realidad posibilitadora de su desarrollo: la financiación, primordialmente privada, dirigida exclusivamente a facilitar la construcción de viviendas o infraestructuras. No obstante, tanto la EAC como la European Association of Archaeologists (EAA) parecen haber notado el efecto de las críticas realizadas sobre la APre y su vis comercial, por lo que han desarrollado un catálogo de eventuales beneficios que la aparición de nuevos vestigios arqueológicos podría reportar en ámbitos que van desde el turismo hasta la educación (Sloane 2020).

De todas formas, este giro no parece que vaya a ser fácil, especialmente en aquellos países en los que la APre está en manos de los promotores. Sus exigencias a los arqueólogos profesionales no van precisamente por ese camino, sino que más bien pasan por sacar partido de su forzado filantropismo para obligar a las empresas de arqueología a asumir tareas de gestión más relacionadas con la ingeniería civil que con la gestión del patrimonio arqueológico (Holbrook 2018: 45). Quedan muy lejos los tiempos de complacientes perspectivas de *close cooperation* entre arqueólogos y promotores de finales de los ochenta del siglo pasado (Maloney s/a: 3).

Ese cambio, operado en la *development-led archaeology* o *commercial Archaeology* británica, también se traduce en el redescubrimiento de la

importancia del acercamiento social. Las experiencias transmitidas (Watson 2020) recalcan, aunque no se haga mención de ello, lo mucho que se ha perdido en este ámbito en los últimos treinta años. Promover que el vecindario traspase las vallas y demás obstáculos con los que los promotores impiden el acercamiento de personas interesadas o curiosas, celosas de que ese conocimiento pueda encender movimientos favorables a la conservación de lo aparecido, no es algo nuevo. Concretamente, en Inglaterra era la política promovida por English Heritage, antes de la aparición de la Planning Policy Guidance 16th en 1990, bajo el lema *Visitors Welcome!* (Binks, Dyke y Gagnall 1988). La progresiva implicación de los promotores dio al traste con esa apertura por las razones indicadas. Por cierto, este es un aspecto al que no prestan especial atención los abanderados de la mencionada *development-led archaeology* (Darvill *et al.* 2019).

A este respecto, la experiencia española ofrece más oscuros que claros. Entre los segundos destaca, sin duda, la campaña *Abierto por obras* que se desarrolló durante la restauración de la catedral de Vitoria-Gasteiz y que también implicó la visita a excavaciones arqueológicas (Fernández Flórez 2007). Sin embargo, en los casos del antiguo solar del mercado de la Encarnación de Sevilla y de la plaza del Castillo de Pamplona, los ayuntamientos cerraron los espacios para impedir que la ciudadanía tuviese acceso visual a unos vestigios en cuya conservación tenían nulo interés. Se obstaculizaban así los movimientos ciudadanos a favor de la preservación, ante el silencio cómplice de la arqueología profesional y académica y de las administraciones culturales (Rodríguez Temiño 2004: 338 ss.). El lema de este movimiento en Sevilla, «¡Queremos ver, queremos saber!», resume la tensión latente, bajo este modelo de APre, entre sociedad, promotores y administraciones culturales.

No puede dejarse de lado un aspecto crucial de esta nueva preocupación por llegar a la sociedad. La sustitución de la investigación arqueológica — como principal devolución a la que moralmente estamos obligados— por un rosario de productos (o subproductos) dirigidos a la excitación identitaria o al banal consumo turístico se propone como solución para facilitar la demostración de la utilidad social de la arqueología (Oliver 2016: 14). Incluso se hacen divisiones entre aquellos profesionales para los que esta investigación es el principal beneficio de su trabajo y quienes creen de mayor trascendencia contribuir, desde la arqueología, al desarrollo sostenible (Van den Dries 2020: 214).

Aunque cuál es la contribución al desarrollo sostenible queda sin aclarar en el trabajo citado

—por no mencionar las justificadas suspicacias que levanta esa locución, así como el papel de «blanqueadora» de proyectos claramente insostenibles que ha jugado la arqueología—, lo cierto es que tal dicotomía da como resultado una falacia. No son incompatibles la investigación y la divulgación, sino complementarias. Lo sorprendente es que se quiera obliterar una promoviendo la otra, sobre todo porque sin la primera no cabe la segunda. Además de ello, la producción de conocimiento histórico es la principal función que nos atribuye la sociedad, de acuerdo con la encuesta realizada a escala europea por el proyecto NEARCH, dirigido por el Inrap entre 2013 y 2018 (Inrap 2017).

Para colmo, esta preterición de la investigación por otras formas de consumo adolece del mismo problema que ha lastrado la divulgación en la arqueología: la falta de una preparación adecuada para efectuar algo distinto a la difusión académica. Cuando se enarbola la bandera del acercamiento social, se hace siempre sin que se tengan presentes los avances y reflexiones de la divulgación científica. Así, a pesar del reciente uso de encuestas para conocer qué piensa la sociedad de nuestro trabajo como arqueólogos, la postura de partida está marcada por lo que se conoce como «modelo deficitario» (Lewenstein 2003).

Este modelo parte de la constatación estadística del alto porcentaje de población iletrada científicamente (o culturalmente), y se propone rellenar ese vacío mediante el suministro de información y conocimientos. Los controles y test de eficacia se establecen para comprobar si el mensaje ha llegado correctamente. En caso de no cumplirse el objetivo previsto, se analizan los fallos comunicativos o el envoltorio pedagógico del mensaje para corregir deficiencias. El fracaso del modelo deficitario ha propiciado, en un contexto más abierto a la legitimidad de la diversidad, el surgimiento de otros enfoques y modelos que comparten el reconocimiento de la importancia, incluso en el quehacer científico, de la participación de la sociedad. Es en este punto en donde parece encajar el Convenio de Faro. Sin embargo, la integración de la ciudadanía no puede hacerse sin una previa transmisión de conocimiento, retomando la esencia del modelo deficitario, pero de forma menos impositiva (Miller 2001). De ahí que siga considerando esencial proceder a una investigación *tout court* que prosiga el trabajo iniciado con la excavación. La difusión académica y la divulgación científica vendrán a continuación.

Los bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico gozan de un estatuto especial, sea jurídico o moral. La razón de ello es que incorporan una referencia al pasado no solo de un territorio concreto, sino, en cierta forma, de toda la hu-

manidad. El libre acceso a esa información nos debiera proporcionar un conocimiento cuyo uso más adecuado sería servir como instancia crítica para comprender mejor nuestro presente. En el caso español, además, es esa posibilidad de engrandecer nuestra percepción del entorno natural y social en el que nos movemos, y no el mero hecho de ser antiguos, la clave sobre la que se sostiene la arquitectura jurídica del patrimonio histórico. Este destino público resulta tan esencial a la propia definición del patrimonio histórico que es el objeto tutelado por el derecho (Alonso Ibáñez 1992). Si España ratifica el Convenio de Faro, este reforzará nuestra cultura jurídica constitucional, pero no creará nada completamente distinto a lo que ya tenemos. La conversión del derecho *del* patrimonio histórico en derecho *al* patrimonio histórico —en teoría— late en nuestro ordenamiento jurídico.

«Ecología o barbarie»

En mi opinión, solo caben dos cursos de acción razonables ante la situación de la APre descrita en los apartados anteriores: procurar afrontar la pesada «mochila» que hemos creado y evitar incrementarla. Ambos elementos son indisociables. No puede acometerse uno sin atender al otro. Este razonamiento es el que me hace concluir que el modelo actual de APre resulta destructivo para la función social a la que está llamada la arqueología.

Con respecto al primer punto, los proyectos ingleses antes mencionados parecen sugerir que, con fondos suficientes arbitrados desde instancias nacionales o internacionales, se solventaría el problema del fardo de excavaciones pendientes. Si hasta ahora han logrado combinar todos los datos procedentes de excavaciones, con más fondos cabría pensar en registros detallados de los bienes recuperados y en la cualificación de esos datos con las analíticas pertinentes. Como ya he explicado, no veo señales de esa demanda por ningún sitio.

Con respecto a la otra parte de la ecuación, disminuir la necesidad de excavar, parece que hay más esperanza. Esta necesidad ha sido reseñada en diferentes ocasiones, pero no creo que sea una mera cuestión de aunar voluntades técnicas y políticas para caminar con paso seguro hacia una «auténtica» APre (Martínez Díaz y Castillo Mena 2007; Martínez Díaz y Querol 2004; 2013). Antes bien, se trata de pasar de gestionar la oferta a gestionar la demanda (Rodríguez Temiño 2004: 369 ss.). Sin embargo, ese giro excede con mucho las posibilidades de las administraciones en el marco socioeconómico actual. Por eso, las reflexiones anteriores no han pasado de ser voces que claman en el desierto. Para hacer factible, y no solo desea-

ble, ese cambio es preciso la aparición de un nuevo paradigma social. Quizás el propio devenir del tardocapitalismo desenfrenado nos esté llevando desgraciadamente al umbral de ese nuevo escenario gracias a la prioridad que está adquiriendo enfrentarse a la emergencia climática.

Superado el embelesamiento del «desarrollo sostenible», las autoridades europeas parecen decididas a apostar por la lucha contra el cambio climático. Al igual que el neoliberalismo ha dado alas a una APre que depreda el patrimonio arqueológico, el ecologismo que parece avvicinarse debe calmar el consumismo de suelo. Esto traería como consecuencia la bajada del ritmo de excavaciones preventivas. En ese marco, cabría incluso impulsar otras medidas de protección amparadas por la APre, pero que solo ocasionalmente se han puesto en práctica (zonas de reserva o rechazo a proyectos que dañan el patrimonio arqueológico). Sería comenzar a gestionar la demanda.

Soy consciente de que suena a cuento de la lechera, especialmente tras la experiencia que nos ha aportado justamente la pandemia de la COVID-19. No obstante, reducir el número de excavaciones no sería un planteamiento nuevo para la arqueología. De hecho, esta reflexión está presente desde que, en las décadas de los sesenta y setenta, países como Italia (Franceschini [pöte] 1966) o Reino Unido (Ove Arup & Partners 1991; Cherry 2011) lo planteasen, bien por motivos de respeto a la finitud del patrimonio arqueológico, bien como estrategia para aumentar las posibilidades de concluir con todo el ciclo de investigación. En España, habida cuenta de las dificultades para financiar las campañas de excavación y del corto número de arqueólogos que había en esas fechas, esta cuestión no estaba en la agenda. Se incorporó a comienzos de los ochenta, como reivindicación del valor de los estudios espaciales para una investigación alternativa a la excavación (Fernández Martínez y Ruiz Zapatero 1984).

El debate sobre si se debe disminuir o no el número de excavaciones aparece cada cierto tiempo, pero siempre con el mismo final: en tablas. Quienes están a favor de continuar con las excavaciones (por ejemplo, Edgeworth 2011) no llegan a puntos de acuerdo con quienes no lo están (Bonnie 2011) ni con quienes nadan entre ambas aguas (Cherry 2011), por hacer referencia al foro organizado por la revista *Archaeological Dialogues* en 2011.

Quiero pensar que el punto muerto en el que se encuentra esta discusión estrictamente arqueológica comienza a disiparse. Ya no se trata de si los arqueólogos debemos excavar como respuesta a la desaparición de vestigios (Demoule 2011) o de si, en realidad, hemos de reconocer que somos una «unstoppable excavation machine» (Nilsson

2011). Todos esos autores están pensando siempre en la lógica del modelo de APre, por lo que el debate se ha vuelto circular. Cambiar de modelo (incluso plantearse) no resulta nada fácil porque está fuera del alcance de las voluntades de los arqueólogos, ya sean académicos, profesionales o trabajen al servicio de las administraciones culturales; tampoco está al alcance de gestores patrimoniales, urbanistas o medioambientalistas. El impulso debe partir de una exigencia social, de una inexcusable y urgente demanda para que, quienes nos dirigen, actúen con rotundidad y contundencia.

Por fortuna, el fantasma del decrecimiento (Latouche 2007; Taibo 2009) sobrevuela Europa. Pero, esta vez, de forma distinta a como ocurriese otrora con el del comunismo: determinados indicios permiten pensar que esta vis ecologista, acaso desprovista de su legado de utopía socialista, va calando poco a poco en los ámbitos decisorios, que ven en ella la única respuesta con visos de garantía de éxito a la emergencia climática³.

De los dos escenarios de avance expuestos por Barreiro, Varela y Parga (2018: 165) al referirse al futuro de la arqueología, uno de naturaleza reformista y otro revolucionario, creo, al contrario que los autores, que estamos abocados a enfrentarnos al segundo por las razones expuestas. Qué tipo de arqueología sería necesaria en un escenario así está siendo objeto de cierta consideración. De momento, la única propuesta es asociarla a una suerte de arqueología comunitaria (Flexner 2020; Zorzín 2021).

Personalmente, creo algo ingenuas esas elucubraciones. El decrecimiento ni nos devolverá a la Edad de Piedra ni tampoco supondrá el advenimiento de ninguna suerte de falansterio. Por supuesto, ignoro cómo será (ni siquiera si será), pero no creo necesario ahondar en elucubraciones en el momento actual. Sin embargo, frenar la avidez de consumo de suelo permitiría, como poco, retomar instrumentos clave en la protección del patrimonio arqueológico, como las zonas de reserva (Lipe 1974; Willems 2014: 152), o devolverles el sentido originario a las figuras que advierten de «riesgo para la arqueología». En ese escenario, tendrían cabida las propuestas de coordinación entre administraciones en aras de reducir la producción de excavaciones mencionadas antes y que, en la situación actual, resultan impracticables.

3. A ese respecto, resulta revelador que el tema principal del debate en las recientes elecciones generales celebradas en Alemania (septiembre de 2021) haya sido la transición ecológica. Bandera que ha dejado de ser monopolio del partido *Die Grünen* (Los Verdes) para ser enarbolada por casi todo el espectro político.

Como todo cambio, de producirse, no será ni bienvenido ni fácil. Posiblemente, las técnicas urbanísticas usadas hasta el momento se muestren claramente insuficientes para encajar las nuevas propuestas. Resulta paradigmático, en este sentido, que quienes ampararon la vehiculización de la APre a través de las figuras de planeamiento en Andalucía no hagan referencia a la protección del patrimonio arqueológico cuando relatan la evolución de la protección del patrimonio histórico en esta región (Becerra García 2020). No obstante, las experiencias sobre resolución alternativa de conflictos, con una larga trayectoria de éxitos en la mediación de situaciones de difícil arreglo por otras vías, pueden servir de guía para no encallar ante la disparidad que surgirá entre las viejas expectativas del urbanismo especulativo y una nueva ordenación del espacio urbano y territorial más acorde con las exigencias derivadas de la emergencia climática. En nuestro país, de manera novedosa, se está explorando esa aproximación para la gestión no

judicializada de conflictos con el patrimonio arqueológico (Corpas Cívicos 2020 y 2021).

En fin, aunque considere patológico tener que finalizar los artículos procurando encontrar remedio a todos los males que aquejan al patrimonio arqueológico, confío en que el «giro ecológico» sea algo más que buenos deseos y pías intenciones en la retórica política. De no ser así, poco importará si agotamos o no los recursos arqueológicos: la próxima generación tendrá que enfrentarse a la barbarie. Ese escenario sí que nos devolverá a la prehistoria.

Ignacio Rodríguez Temiño

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Junta de Andalucía/Némesis.

Asociación para la investigación y defensa del patrimonio cultural contra el expolio y el tráfico ilícito.

<https://orcid.org/0000-0003-1711-6694>

ignacio.rodriguez.temino@juntadeandalucia.es

Referencias bibliográficas

ALONSO IBÁÑEZ, M. R. (1992). *El patrimonio histórico. Destino público y valor cultural*. Civitas. Madrid.

Archéologie Urbaine. Actes du Colloque International. Tours, 1980 (1982). Ministère de la Culture. Paris.

AZKARATE GARAI-OLAUN, A., SOLAUN BUSTINZA, J. L. (eds.) (2013). *Arqueología e historia de una ciudad. Los orígenes de Vitoria-Gasteiz* (vol. I y II). Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua. Bilbao.

BARREIRO MARTÍNEZ, D., VARELA POUSA, R., PARGA DANS, E. (2018). Malta beyond Malta: The Confluence between Preventive and Public Archaeology as a New Horizon*. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada*, 28: 149-173.

BECCERRA GARCÍA, J. M. (2020). *La conservación de la ciudad histórica en Andalucía*. Almuzara. Córdoba.

BELÉN DEAMOS, M., ANGLADA CURADO, R., ESCACENA CARRASCO, J. L., JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A., LINEROS ROMERO, R., RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, I. (1997). *Arqueología en Carmona (Sevilla). Excavaciones en*

la Casa-Palacio del Marqués de Saltillo. Junta de Andalucía. Sevilla.

BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J. (2003). *El derecho de propiedad: límites derivados de la protección arqueológica*. Montercorvo. Madrid.

BINKS, G., DYKE, J., GAGNALL, PH. (1988). Visitors Welcome. *Manual on the Presentation and Interpretation of Archaeological Excavations*. English Heritage. Londres.

BLEIN, C. (2019). L'archéologie préventive, une source de solutions pour demain? Réflexions sur les enjeux scientifiques et sociétaux de l'archéologie préventive face aux effets délétères du néo-libéralisme. *Canadian Journal of Bioethics / Revue Canadienne de Bioéthique*, 2(3): 120-127.

BLIN, O. (2007). Une nouvelle description du monde gallo-romain. En: DEMOULE, J.-P. (ed). *L'archéologie préventive dans le monde. Apports de l'archéologie préventive à la connaissance du passé*. Editions La Découverte. Paris: 67-81.

BONNIE, R. (2011). 'Haven't we dug enough now?' Excavation in the light of intergenerational equity. *Archaeological Dialogues*, 18(1): 48-58.

- CARVER, M. (1992). Digging for data: archaeological approaches to data definition, acquisition and analysis. En: *Jornadas Internacionales de Arqueología de Intervención*, (San Sebastián, 1991). Gobierno Vasco. Bilbao: 163-175.
- CASTILLO MENA, A. (2014). Two years of ratification - twenty years of legal implementation: The Valletta Convention in the Spanish case: a fact or fantasy? En: VAN DER HAAS, V. M., SCHUT, P. A. C. (eds.). *The Valletta Convention: Twenty Years After – Benefits, Problems, Challenges*. EAC Occasional Paper No. 9. Archaeolingua. Budapest: 89-98.
- CESESAP [Commission d'Évaluation Scientifique, Économique et Sociale de l'Archéologie Préventive] (2013). *Livre blanc de l'archéologie préventive*. Ministère de la Culture. Paris.
- CHAPELOT, J. (1982). L'intégration des données archéologiques dans la planification urbaine. *Archéologie Urbaine. Actes du Colloque International. Tours, 1980*. Ministère de la Culture. Paris: 141-161.
- CHAPELOT, J. (2010). Retour critique sur l'évolution de l'archéologie médiévale depuis dix ans. *L'Atelier du Centre de Recherches Historiques*, 6 <<https://journals.openedition.org/acrh/2734#tocto1n2>> [consulted 21/05/2021].
- CHERRY, JOHN F. (2011). Still not digging, much. *Archaeological Dialogues*, 18(1): 10-17.
- CORPAS CÍVICOS, N. (2020). Alternativas en resolución de conflictos en patrimonio arqueológico. El caso del expolio y el tráfico ilícito internacional. *Revista d'Arqueologia de Ponent*, 30: 337-348.
- CORPAS CÍVICOS, N. (2021). *El conflicto en la gestión del patrimonio arqueológico: casos en España y América Latina*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- DARVILL, T., BARRASS, K., CONSTANT, V., MILNER, E., RUSSELL, B. (2019). *Archaeology in the PPG16 Era: Investigations in England 1990-2010*. Oxbow Books. Londres.
- DEMOULE, J.-P. (2002). Bilan et perspectives de l'archéologie préventive au moment de la création de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP). *Bulletin de la Société Préhistorique Française*, 99(3): 599-61.
- DEMOULE, J.-P. (ed.) (2007). *L'archéologie préventive dans le monde. Apports de l'archéologie préventive à la connaissance du passé*. Editions La Découverte. Paris.
- DEMOULE, J.-P. (2011). We still have to excavate - but not at any Price. *Archaeological Dialogues*, 18(1): 5-10.
- DEMOULE, J.-P. (2016). Preventive Archaeology: Scientific Research or Commercial Activity? En: NOVAKOVIĆ, P., HORŇÁK, M., GUERMANDI, M. P., STÄUBLE, H., DEPAEPE, P., DEMOULE, J.-P. (eds.). *Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe*. Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. Ljubljana University Press. Liubliana: 9-20.
- DEPAEPE, P. (2016). Preventive Archaeology, Scientific Research and Public Outreach: Some Non-politically Correct Thoughts. En: NOVAKOVIĆ, P., HORŇÁK, M., GUERMANDI, M. P., STÄUBLE, H., DEPAEPE, P., DEMOULE, J.-P. (eds.). *Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe*. Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. Ljubljana University Press. Liubliana: 33-40.
- EDGEWORTH, M. (2011). Excavation as a ground of archaeological knowledge. *Archaeological Dialogues*, 18(1): 44-46.
- EVERILL, P. (2012). *The Invisible Diggers - A Study of British Commercial Archaeology*. Oxbow Books. Oxford.
- FRANCESCHINI, F. (Pdte. de la Comisión) (1966). Relazione de la Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1: 119-244.
- FERNÁNDEZ FLORES, A; GARCÍA SANJUÁN, L., DÍAZ-ZORITA BONILLA, M. (eds.) (2016). *Montelirio: un gran monumento megalítico de la Edad del Cobre*. Junta de Andalucía. Sevilla.
- FERNÁNDEZ FLÓREZ, M. C. (2007). Restauración de la Catedral de Santa María de Vitoria: Abierto por obras. *Cercha. Revista de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos*, 92: 72-78.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. M., RUIZ ZAPATERO, G. (1984). El análisis de territorios arqueológicos: una introducción crítica. *Arqueología Espacial*, 1. Colegio Universitario. Teruel: 55-71.
- FLEXNER, J. L. (2020). Degrowth and a sustainable future for archaeology. *Archaeological Dialogues*, 27: 159-171.

- FLORJANOWICZ, P. (2016). From Valletta to Faro with a stopover in Brussels. International legal and policy background for archaeology or simply the understanding of heritage at the European level. En: FLORJANOWICZ, P. (ed.). *When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology in the 21st century*. EAC Occasional Paper No. 11. Archaeolingua. Budapest: 25-34.
- GALINIÉ, H. (1982). L'archéologie urbaine. *Archéologie Urbaine. Actes du Colloque International. Tours, 1980*. Ministère de la Culture. Paris: 21-26.
- GALINIÉ, H. (1999). Enjeux en archéologie urbaine. *Revue Archéologique du Picardie*, 16: 13-15.
- GARMY, P. (2001). France. *Rapport sur la situation de l'archéologie urbaine en Europe*. Editorial del Consejo de Europa. Estrasburgo: 91-102.
- GEPPERT, K., MELLER, H. (2016). A survey of heritage management in Germany, with particular reference to Saxony-Anhalt. En: FLORJANOWICZ, P. (ed.). *When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology in the 21st century*. EAC Occasional Paper No. 11. Archaeolingua. Budapest: 35-46.
- GILL, A. (2020). Development-Led Archaeology and Public Benefit from a Swedish Perspective. En: WATSON, S. (ed.). *Archaeology and Public Benefit. Moving the Debate Forward*. EAC Occasional Paper No. 16. Archaeolingua. Budapest: 207-212.
- GONZÁLEZ ACUÑA, D. (2004). *Patrimonio arqueológico urbano: propuesta metodológica de evaluación del estado de conservación y riesgo. Aplicación en el Conjunto Histórico de Sevilla*. Spal Monografías, V. Universidad de Sevilla. Sevilla.
- GUERMANDI, M. P. (2016). Birth and Crib Death of Preventive Archaeology in Italy. En: NOVAKOVIĆ, P., HORŇÁK, M., GUERMANDI, M. P., STÄUBLE, H., DEPAEPE, P., DEMOULE, J.-P. (eds.). *Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe*. Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. Ljubljana University Press. Liubliana: 301-312.
- HOLBROOK, N. (2018). What do the funders of infrastructure projects in England expect from their commercial archaeologists? En: STEFÁNSDÓTTIR, A. (ed.). *Development-led Archaeology in Europe. Meeting the Needs of Archaeologists, Developers and the Public*. EAC Occasional Paper No. 14. Archaeolingua. Budapest: 43-48.
- INRAP (2017). *NEARCH Portal for Publications and Outputs* [data-set]. York: Archaeology Data Service [distributor] <https://doi.org/10.5284/1041589> [consulted 11/09/2021].
- JÉGOUZO, Y. (1995). Protection du patrimoine archéologique et régime administratif et juridique des opérations d'équipement et de construction. En: JÉGOUZO, Y., FRIER, P. (dirs.). *Archéologie et droit de l'urbanisme en Europe*. Sirey. Paris: 312-326.
- KRISTIANSEN, K. (2009). Contract archaeology in Europe: an experiment in diversity. *World Archaeology*, 41(4): 641-648.
- LASFARGUES, J., MANDY, B. (1985). Lyon et son patrimoine : dialogue tourmenté. *Archéologie et projet urbain*. Roma: 147-153.
- LATOUCHE, S. (2007). *Farewell to Growth*. Polity Press. Cambridge.
- LEWENSTEIN, B. V. (2003). *Models of Public Communication of Science & Technology*. <<https://hdl.handle.net/1813/58743>> (consulted 19 may 2021).
- LIPE, W. D. (1974). A Conservation Model for American Archaeology. *The Kiva*, 39 (3-4): 213-245.
- MALONEY, J. (s/a). Introduction. En: HUNTING, P. (comp.). *Archaeology and Development. A record of cooperation*. Alpine Press. s/l: 3-4.
- MARCINIAK, A. (2015). The aftermath of Malta. En: VAN DEN DRIES, M. H., VAN DER LINDE, S. J., STRECKER, A. (eds.). *Fernweh. Crossing borders and connecting people in archaeological heritage management. Essays in honour of prof. Willem J.H. Willems*. Sidestone Press. Leiden: 34-37.
- MARTÍNEZ DÍAZ, B., CASTILLO MENA, A. (2007). Preventive Archaeology in Spain. En: BOZÓKI-ERNYÉY, K. (ed.). *European Preventive Archaeology*. Papers of the EPAC Meeting (Vilnius, 2004). National Office of Cultural Heritage, Hungary - Council of Europe. Budapest: 187-208.
- MARTÍNEZ DÍAZ, B., QUEROL, M. A. (2004). La gestión del patrimonio arqueológico en las comunidades autónomas: balance y situación actual. *PH. Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico*, 48: 101-108.
- MARTÍNEZ DÍAZ, B., QUEROL, M. A. (2013). Arqueología preventiva. Gestión del patrimonio arqueológico. En: QUIRÓS CASTILLO, J. A. (ed.). *La materialidad de la historia. La arqueología en los inicios del siglo XXI*. Akal. Madrid: 143-176.

- MATEOS CRUZ, P., PALMA GARCÍA, F. (eds.) (2020). *Actas del Congreso Internacional La Arqueología Urbana en las Ciudades de la Hispania Romana: Proyectos Integrales de Investigación, Conservación y Difusión*. Monografías Arqueológicas de Mérida (Memoria 2). Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Mérida.
- McGILL, G. (1995). *Building on the Past. A guide to the archaeology and development process*. E & FN Spon. London.
- MILLER, S. (2001). Public Understanding of Science at the Crossroads. *Public Understanding of Science*, 10(1): 115-120.
- NEGRI, V. (1995). La prise en compte du patrimoine archéologique par la planification de l'urbanisme. En: JÉGOUZO, Y., FRIER, P. (dirs). *Archéologie et droit de l'urbanisme en Europe*. Sirey. Paris: 305-312.
- NILSSON, B. (2011). Archaeology and the unstoppable excavation machine. A Swedish point of view. *Archaeological Dialogues*, 18(1): 26-29.
- NOVAKOVIĆ, P., HORŇÁK, M. (2016). From Rescue to Preventive Archaeology: a Highly Challenging 25 Years in the Former Socialist Countries of Eastern Europe. En: NOVAKOVIĆ, P., HORŇÁK, M., GUERMANDI, M. P., STÄUBLE, H., DEPAEPE, P., DEMOULE J.-P. (eds.). *Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe*. Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. Ljubljana University Press. Liubliana: 21-32.
- OVE ARUP & PARTNERS (1991). *York Development and Archaeology Study*. Ove Arup & Partners Ltd. Londres.
- OLIVIER, A. (2016). The Valletta Convention: twenty years after - a convenient time. En: VAN DER HAAS, V. H., SCHUT, P. A. C. (eds.). *The Valletta Convention: Twenty Years After - Benefits, Problems, Challenges*. EAC Occasional Paper No. 9. Archaeolingua. Budapest: 11-16.
- PILLATT, T., BEALE, G., GREEN, K., MAXWELL, D., MYTUM, H., NIVEN, K., RICHARDS, J. (2020). The Burial Space Research Database (Data Paper). *Internet Archaeology*, 55.
- RANDOIN, B. (2016). French preventive archaeology: administrative organisation, role of the stakeholders and control procedures. En: FLORJANOWICZ, P. (ed.). *When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology in the 21st century*. Archaeolingua. Budapest: 59-64.
- RAVN, M. (2013). It's about knowledge not systems: a contribution to a complex discussion of good, bad and ugly production of archaeological knowledge in Europe. *World Archaeology*, 45(4): 642-652.
- RICHARDS, J. D. (2017). Twenty Years Preserving Data: a View from the United Kingdom. *Advances in Archaeological Practice*, 5(3): 227-237.
- RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2004). *Arqueología urbana en España*. Ariel. Barcelona.
- RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2006). Arqueología e investigación del urbanismo islámico en las ciudades andaluzas: balance de veinte años de gestión. *Arqueología y Territorio Medieval*, 13(2): 157-173.
- RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2010a). Arqueología urbana en tiempos de crisis. *Arqueología, patrimonio histórico y urbanismo en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Actas de las Jornadas Técnicas sobre Arqueología, Patrimonio Histórico y Urbanismo (Tarragona 2009)*. Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Tarragona: 17-29.
- RODRÍGUEZ TEMIÑO, I. (2010b). Repensar la arqueología urbana. *Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2009*. Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona: 15-25.
- SCHANGER, N., AITCHISON, K. (2010). *Archaeology and the global economic crisis. Multiple impacts, possible solutions*. Culture Lab Éditions. Tervuren.
- SCHUT, P., SCHARFF, D., DE WIT, L. C. (2015). Amersfoort Agenda. En: SCHUT, P., SCHARFF, D., DE WIT, L. C. (eds.). *Setting the Agenda: Giving new meaning to the European Archaeological Heritage*. EAC Occasional Paper No. 10. Archaeolingua. Budapest: 15-23.
- SLOANE, B. (2020). Making the Case for the Public Benefits of Development-Led Archaeology. En: WATSON, S. (ed). *Archaeology and Public Benefit. Moving the Debate Forward*. EAC Occasional Paper No. 16. Archaeolingua. Budapest: 9-17.
- STEFÁNSDÓTTIR, A. (2018). Development-led archaeology in Europe. Meeting the needs of archaeologists, developers and the public. En: STEFÁNSDÓTTIR, A. (ed.). *Development-led Archaeology in Europe. Meeting the Needs of Archaeologists*,

- Developers and the Public*. EAC Occasional Paper No. 14. Archaeolingua. Budapest: 7-14.
- TAIBO, C. (2009). *En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie*. Libros de la Catarata. Madrid.
- TED'A (1987). *Els enterraments del parc de la Ciutat. I la problemàtica funerària de Tàrraco*. Ajuntament i Fons Social Europeu. Tarragona.
- THOMAS, R. (2002). Comment: rescue archaeology: The French way, by Jean-Paul Demoule. *Public Archaeology*, 2: 236-238.
- TROW, S. (2016). 25 Years of Development-led Archaeology in England: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. En: NOVAKOVIĆ, P., HORŇÁK, M., GUERMANDI, M. P., STÄUBLE, H., DEPAEPE, P., DEMOULE, J.-P. (eds.). *Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe*. Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. Ljubljana University Press. Liubliana: 55-68.
- VAQUERIZO GIL, D. (2010). *Necrópolis urbanas en Baetica*. Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Tarragona.
- VAN DEN DRIES, M. (2020). The Public Benefits of Archaeology According to the Public. En: WATSON, S. (ed.). *Archaeology and Public Benefit. Moving the Debate Forward*. EAC Occasional Paper No. 16. Archaeolingua. Budapest: 213-226.
- VERBRUGGEN, M. (2016). Everything you always wanted to know about commercial archaeology in the Netherlands. En: FLORJANOWICZ, P. (ed.). *When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology in the 21st century*. EAC Occasional Paper No. 11. Archaeolingua. Budapest: 77-84.
- VIRÁGOS, G. (2018). The magic triangle. En: STEFÁNSDÓTTIR, A. (ed.). *Development-led Archaeology in Europe. Meeting the Needs of Archaeologists, Developers and the Public*. EAC Occasional Paper No. 14. Archaeolingua. Budapest: 61-64.
- VOLPE, G. (2016). *Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini*. De Agostini Libri. Novara.
- WATSON, S. (2020). Public Benefit: The Challenge for Development-Led Archaeology in the UK. En: WATSON, S. (ed.). *Archaeology and Public Benefit. Moving the Debate Forward*. EAC Occasional Paper No. 16. Archaeolingua. Budapest: 141-148.
- WILLEMS, W. (2014). Malta and its consequences: a mixed blessing. En: VAN DER HAAS, V. M., SCHUT, P. A. C. (eds.). *The Valletta Convention: Twenty Years After - Benefits, Problems, Challenges*. EAC Occasional Paper No. 9. Archaeolingua. Budapest: 151-156.
- WILLEMS, W., VAN DEN DRIES, M. (2007). The origins and development of quality assurance in archaeology. En: WILLEMS, W., VAN DEN DRIES, M. (eds.). *Quality Management in Archaeology*. Oxbow Books. Oxford: 1-12.
- WOLLÁK, K. (2014). Foreword and acknowledgement. En: VAN DER HAAS, V. M. P., SCHUT, A. C. (eds.). *The Valletta Convention: Twenty Years After - Benefits, Problems, Challenges*. EAC Occasional Paper No. 9. Archaeolingua. Budapest: 7-8.
- ZORZIN, N. (2021). Is archaeology conceivable within the degrowth movement? *Archaeological Dialogues*, 28: 1-16.